Protestas y represión en diciembre¹

1. Introducción

Durante diciembre del 2001, Argentina vivió una serie de acontecimientos que marcaron sensiblemente su historia institucional y política. En sólo quince días el país tuvo cinco presidentes, consolidó su *default* financiero, abandonó la férrea política cambiaria que desde 1991 sostenía y devaluó el peso. Todo ello en medio de una crisis socio-económica que todavía reclama recaudos extremos.

En un contexto de profundo retraimiento económico e inequidad social se produjeron en todo el territorio encendidas manifestaciones de protesta. Contra ellas, el Estado desplegó una fuerte represión que incluyó la declaración de Estado de sitio en toda la Nación. Alrededor de treinta personas murieron y otras 4500 fueron detenidas. Durante el conflicto, muchos comercios fueron saqueados, un gran número de ellos por grupos de personas provenientes de sectores relegados, y se produjeron destrozos en un clima violento que el Estado no pudo contener.

El presidente Fernando De la Rúa, en funciones desde diciembre de 1999, debió renunciar en el peor momento de la crisis. La efervescencia popular no cesó por ello. Después del interinato del presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, asumió la conducción del Poder Ejecutivo Nacional, pero una semana después de su designación también debió dejar el cargo en medio de un profundo malestar social y de un delicado panorama económico y político.

Luego de un breve interregno, durante el cual se hizo cargo del Poder Ejecutivo Nacional el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Eduardo Caamaño, la Asamblea Legislativa designó al senador Eduardo Duhalde como titular del Ejecutivo. A partir de su designación, los focos de mayor tensión parecieron haberse apaciguado ligeramente. Sin embargo, el contexto estructural que sirvió de marco a los conflictos no ha variado sustantivamente y persisten las manifestaciones de protesta y la violencia en muchos puntos del país.

La relación que durante estos días ligó a los manifestantes con las instituciones públicas debe ser analizada cuidadosamente y desde distintas perspectivas. El presente capítulo propone abordar la cuestión bajo el prisma de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, puede concluirse, al menos, que los órganos políticos, las fuerzas de seguridad y la justicia fallaron en su deber de asegurar la vida, la libertad de expresión y los bienes de los habitantes de la Nación.

2. El contexto socio económico

El ajuste estructural iniciado a comienzos de la década de 1990 se profundizó durante los últimos años y afectó la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, en

¹ Este capítulo ha sido elaborado a partir del documento "La protesta social en Argentina durante diciembre del 2001" –actualizado al 1º de marzo del 2002 y presentado el 8 de marzo del 2001 en una Audiencia sobre la situación general de derechos humanos en Argentina, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)–. El desarrollo de este capítulo estuvo a cargo de Leonardo Filippini, abogado del CELS, con la colaboración de los Programas Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS. Este documento es parte de una extensa investigación sobre represión y criminalización de la protesta social en Argentina, que el CELS elabora actualmente y que será publicada en los próximos meses.

especial, de los grupos más vulnerables. La precarización de los derechos sociales se ha caracterizado por un proceso de concentración de la riqueza en una pequeña porción de la sociedad, por un aumento creciente de los índices de pobreza e indigencia y por la consecuente consolidación de un sector de la población sujeto a una situación de desempleo o subempleo².

En los últimos 25 años, pero con particular intensidad a partir de mediados de la década del 90, se pulverizaron los ingresos de la gente de menores recursos, a tal punto que el 20% de la población más rica, que en 1974 ganaba 7,8 veces más que el 20% más pobre, ahora percibe 14,6 veces más. Según este informe, la distancia de 14,6 veces entre ricos y pobres es la peor brecha de desigualdad en la distribución de los ingresos de la que se tiene ingreso estadístico, superando incluso a las registradas en las ondas hiperinflacionarias de los años 1989 y 1990 y durante la crisis del Tequila en 1995.

En el Gran Buenos Aires (GBA), la concentración del ingreso y la regresividad distributiva registrada entre 1999 y 2000 fue tan intensa, que la cúpula de la pirámide de ingresos creció en su participación, en un solo año, casi tanto como durante toda la década³.

Progresivamente aumentaron los índices de pobreza e indigencia y en vastos sectores del país abarcan actualmente a más del 50% de la población. A modo de ejemplo, aun antes de que estallara la crisis, se registraba un índice de pobreza del 35,4% (4,295 millones de personas) y de indigencia del 12,2% (1,480 millones de personas)⁴ sólo en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, según estadísticas oficiales del 2001⁵. En el Gran Buenos Aires, el 51,7% de población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 19,2%, debajo de la línea de indigencia.

La situación es particularmente dramática en las regiones noreste y noroeste: en Formosa 59,8% de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza. En Corrientes, el 57,8%; en Concordia, provincia de Entre Ríos, el 57,5%; en Palpalá, provincia de Jujuy, el 56,6%; y en el Gran Resistencia, provincia de Chaco, el 55,1%⁶.

² Para un análisis más detallado del proceso de reformas aplicado durante la década del 90 y sus consecuencias, ver en este mismo Informe el capítulo “Políticas sociales en Argentina ¿El fin del consenso sobre el “modelo”?”

De acuerdo con un estudio realizado por la consultora Equis, Argentina se encuentra entre los 15 países del mundo que tienen la peor distribución de la riqueza y encabeza la tabla con la peor desigualdad social entre los países de economías con niveles de vida relativamente altos.

Cfr. “Estudio distribución del ingreso y brecha entre ricos y pobres. Participación en el PBI y disponibilidad de ingreso anual y diario para la población total desagregados por decil de hogares. Comparación con países seleccionados según datos PNUD/ONU y entre provincias. Evolución de los últimos 25 años”, Equipos de Investigación Social, Equis, noviembre del 2001.

³ Cfr. Equis, Equipos de Investigación Social, “Pobreza, distribución del ingreso y caída de la clase media en el último año. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares”, agosto del 2000.

⁴ La población en situación de indigencia en la zona metropolitana paso de un 7,7% (940.000 personas) en octubre del 2000 a un 12,2% (1.5 millones de personas) en octubre del 2001, lo que implica un aumento de casi el 60% en un año.

⁵ Encuesta Permanente de Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo -INDEC-, octubre, 2001.

⁶ Estos datos corresponden a la medición efectuada por el INDEC en mayo del 2001, por lo que —de acuerdo con la tendencia general a nivel nacional— es de suponer que estos porcentajes en la actualidad sean muy superiores. Más información en el capítulo “Políticas sociales ¿Fin del “modelo”?”.

A su vez, la tasa de desempleo registra hoy un índice del 18,3%, mientras que el subempleo asciende al 16,3%⁷. Idéntico proceso se verifica con relación a los trabajadores no registrados. Según datos del Ministerio de Trabajo⁸, el 41,1% de los asalariados (3.744.497 personas) trabaja en la clandestinidad, fuera del sistema de seguridad social.

La situación descrita es fruto de profundas reformas normativas e institucionales que han agredido la sustancia y calidad de los “derechos sociales”, privándolos de su contenido esencial y de los mecanismos jurídicos e institucionales para reclamar su vigencia. Estas reformas no se han orientado en el sentido de aumentar la cobertura de las redes de seguridad social. Más bien, han trasladado gran parte de la responsabilidad de la cobertura frente a las contingencias sociales a los propios ciudadanos⁹.

La regulación de las relaciones laborales brinda innumerables ejemplos para ilustrar esta política. A través de la flexibilización laboral, se derogaron y condicionaron algunos derechos laborales y se restringió el alcance de otros¹⁰.

En el mes de julio del 2001, se sancionó la ley 25.453, llamada “Ley de Equilibrio Fiscal”. Esta ley fue conocida públicamente como “Ley de Déficit Cero” e implicó un vuelco profundo en materia de gasto público. Esencialmente, condicionó los haberes de empleados estatales y jubilados al resultado de la recaudación fiscal. La determinación de la forma de implementación de la reducción del monto de los salarios y los haberes previsionales fue delegada al poder administrador. Éste, conforme con la ley, es competente para definir la extensión de cada ejercicio presupuestario y establecer el coeficiente de la reducción. De esta forma, el Poder Ejecutivo Nacional fue facultado para sujetar el pago de sus obligaciones a su propia conducta, pues sólo paga sus deudas en la medida de lo que él mismo recauda.

Además de la reducción de los haberes de jubilados y empleados estatales, la Ley de Déficit Cero también impactó fuertemente sobre los programas sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente¹¹. El principio general establecido en

⁷ Cf. última medición del INDEC, octubre del 2001. En algunas localidades, tales como Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, se registran tasas de desempleo superiores al 20%.

⁸ Diario Clarín, 14/07/01.

⁹ Dentro de esta lógica, predominante en nuestro país, los ciudadanos no tienen acceso indiferenciado a instituciones, como la salud, previsión social y educación pública. Las prestaciones sociales son focalizadas sólo sobre ciertos grupos y quienes aspiran a ser beneficiarios de un plan social deben “calificar como destinatarios de una asistencia basada en su ‘insuficiencia’ de medios” (Pautassi, Laura, *Reflexiones en torno al trabajo “El acceso a la justicia de los sectores populares”*, junio, 2000, Mimeo). Dentro de este esquema “no se efectivizan los derechos de las personas, por ejemplo el derecho de acceso de una mujer embarazada al sistema de salud, sino que existe un programa asistencial focalizado para mujeres embarazadas carentes de recursos. Esto es, no hay ‘derecho a’, sino un ‘programa para’. Esto se relaciona directamente con la utilización de políticas focalizadas para los grupos vulnerables en desmedro del fortalecimiento de las instituciones de política social de corte universalista”. (Pautassi, Laura, *Estabilización, ajuste estructural y derechos sociales. Acerca de la relación entre orientación política y cambio técnico-económico*, 2001, Mimeo).

¹⁰ Lo Vuolo, R y otros, *La pobreza de la política contra la pobreza*, Madrid-Buenos Aires, 1999, pág 167. Además “se autorizó a celebrar convenios colectivos, derogando normas laborales mínimas; es decir, la posibilidad de negociar colectivamente a la baja en materias antes inderogables por esta vía”.

¹¹ Los beneficiarios de todos los planes sociales poseen características comunes. Entre ellas: encontrarse en situación de alto riesgo social con necesidades básicas insatisfechas (NBI), tratarse de población vulnerable por emergencias climáticas o catástrofes, o ser grupos especialmente vulnerables (niños de 2 a 5 años; personas con discapacidades o necesidades especiales o comprendidas dentro de la tercera edad; niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal; niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad

dicha ley quedó consagrado en su artículo 10, según el cual, cuando los recursos presupuestarios estimados no fueren suficientes para atender a la totalidad de los créditos presupuestarios previstos, se reducirán proporcionalmente los créditos correspondientes a la totalidad del Sector Público Nacional, a modo de mantener el equilibrio entre gastos operativos y recursos presupuestarios.

Al momento de dictarse la Ley de Déficit Cero se planteó un fuerte debate sobre el alcance que esta norma tendría con relación a los fondos destinados por el presupuesto a los programas sociales. Por entonces, existió un compromiso público de las autoridades en el sentido que dichos fondos no serían afectados por el recorte en el gasto público que el nuevo sistema imponía¹². Este compromiso estatal, no obstante, no fue incorporado al texto legal y tal situación dio origen a que el recorte previsto por la ley se aplicara en su plenitud a los programas sociales, sumergiendo a los sectores más débiles en una mayor indefensión y desprotección. En octubre del 2001, poco después de la entrada en vigencia de la Ley de Déficit Cero, no se ejecutaron las partidas comprometidas para programas alimentarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, que benefician a dos millones y medio de personas¹³.

3. La protesta social en Argentina durante la década del 90

Las consecuencias sociales de las profundas transformaciones socio-económicas producidas durante la década del 90 incentivaron la multiplicación de reclamos de derechos que pusieron al Poder Judicial en el centro de la escena. Esta lógica de reclamos al Estado acompañó la emergencia de nuevos actores, nuevos temas, nuevos formatos de protesta y nuevos argumentos incorporados progresivamente a la consideración pública¹⁴.

El ejemplo más notable de este fenómeno puede encontrarse en la multiplicación de cortes de ruta y demandas articuladas como forma de presión para conseguir puestos de trabajo _a través de la inclusión en los padrones de los planes de empleo_ y el incremento del gasto social en alimentación, salud y educación. Los cortes de ruta han reflejado de modo

social; familias con síndrome de violencia, abuso o maltrato infantil; comunidades aborígenes; población radicada en parajes, asentamientos o localidades rurales o subrurales; ámbitos dispersos del medio rural, barrios o áreas periféricas de pueblos o ciudades no cubiertos por sistemas institucionales, escuelas y zonas de influencia; personas con NBI) y características específicas establecidas por diversas leyes especiales nacionales (madre de siete o más hijos, ancianos de más de 69 años, inválidos, excombatientes de Malvinas y familiares de desaparecidos, entre otros).

¹² Cf. declaraciones del ex Ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Juan Pablo Cafiero, publicadas por el diario La Nación el 02-09-01.

¹³ A los fines de coordinar las acciones entre los distintos programas alimentarios, en el mes de julio del 2000 se creó el programa UNIDOS, que fusionó el PRANI y el ASOMA, a la vez que integró el PROHUERTA (cf. art. 4º, decreto 547/00). El programa UNIDOS se dirigía a hogares de todo el país que reunían las siguientes características: jefe/a de hogar con educación primaria incompleta, más alguna de estas condiciones; todos los miembros debían estar en edad inactiva, la tasa de dependencia debía ser mayor de tres, debía vivir algún niño/a adolescente hasta 17 años, algún adulto/a mayor de 60 años. La población era de aproximadamente 600.000 hogares (aproximadamente 2.442.000 destinatarios).

Por su parte, el programa PROHUERTA está destinado a mejorar la condición alimentaria de la población rural y urbana en situación de pobreza a través de la autoproducción de alimentos en pequeña escala (huertas y granjas familiares, escolares y comunitarias o institucionales). A tal fin presta asistencia técnica, capacitación y provisión de insumos críticos para huertas y granjas comunitarias, familiares y escolares, las que se desarrollan a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

¹⁴ Mayor información sobre la articulación de las nuevas formas de protesta puede consultarse en el *Informe Derechos Humanos, Argentina 2001*, CELS, Siglo XXI, Buenos Aires, 2001, 349 págs.

ostensible la disconformidad de los sectores más relegados de la población. Así, las clásicas movilizaciones de grandes organizaciones sindicales vinculadas a la tradicional relación de trabajo, fueron reemplazadas por nuevas formas de protesta gestadas por los sectores más relegados, víctimas del desempleo y la recesión.

En 1997 hubo 104 cortes de ruta en todo el país y esta práctica fue incrementándose durante los años siguientes. En 1998 fue cortada una ruta por semana, en 1999 una cada día y medio, y en el 2000 hubo al menos un corte diario. En 2001, el promedio fue de entre cuatro y cinco cortes por día¹⁵.

En los últimos meses del 2001 se produjeron, también, protestas cuyos escenarios fueron las grandes ciudades y consistieron en manifestaciones públicas realizadas generalmente frente a los edificios donde funcionan las sedes gubernamentales. Se trata de protestas en contra de las reducciones salariales, la reducción de personal en el sector público, las privatizaciones y el desmantelamiento del aparato de contención social del Estado, y la crisis del sistema financiero y bancario.

3.1. Criminalización y represión de la protesta social

La justicia penal consideró ilícitas la mayoría de las acciones desarrolladas por los manifestantes en el marco de estas protestas, descartándose que éstas pudieran encontrar amparo en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Si bien se han impuesto algunas condenas a manifestantes y activistas, el fenómeno de mayor trascendencia ha sido el sometimiento de los participantes a proceso. A través de la imputación delictiva, el Estado ha ejercido, en numerosos casos, el control sobre la protesta.

En muchas otras ocasiones, además, las manifestaciones populares fueron reprimidas ilegítimamente por las fuerzas de seguridad de la Nación o de las provincias. Estos casos se caracterizaron por un uso abusivo de la violencia que produjo varias muertes y gran cantidad de heridos en todo el país¹⁶.

Algunos casos emblemáticos sobre el modo en que la reacción estatal se ha desplegado contra este tipo de manifestaciones, han quedado fijados en la conciencia colectiva. Entre ellos, las muertes de Víctor Choque, en la provincia de Tierra del Fuego; Teresa Rodríguez, en Neuquén; Mauro Ojeda y Francisco Escobar, provincia de Corriente; y Aníbal Verón, Carlos Santillán y José Oscar Barrios en la provincia de Salta. Estos casos conforman hoy un conjunto sumamente representativo de la reacción estatal frente a la protesta popular.

4. Las protestas de diciembre del 2001

4.1. Antecedentes próximos

En diciembre del 2001, la situación del país era delicada. La crisis era considerada por muchos como terminal. En ese marco complejo, el gobierno nacional adoptó durante los

¹⁵ Diario La Nación, 19/12/01.

¹⁶ El Comité de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CAJ), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y CELS denunciaron en marzo del 2001, en el marco de una audiencia de carácter general ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la sistemática criminalización de protestas y movilizaciones sociales y la represión física de los manifestantes a través del accionar de las fuerzas de seguridad como la Policía y la Gendarmería.

primeros días de diciembre una serie de restricciones importantes a la entrega en efectivo de los depósitos bancarios particulares. De tal forma, las transferencias dinerarias se vieron limitadas y la casi totalidad de los pagos debió hacerse por medio de transferencias bancarias. El “corralito”¹⁷, establecido por el decreto 1570/01 del Poder Ejecutivo, encerró los depósitos de grandes sectores de la alicaída clase media local y perjudicó a todos los sectores de la economía informal.

A partir del 12 de diciembre, las manifestaciones de protesta ganaron la calle y canalizaron el enojo de los distintos sectores. Ese día, por ejemplo, los comerciantes realizaron distintas movilizaciones en las que marcharon golpeando cacerolas por distintos barrios porteños¹⁸.

El 13 de diciembre se desarrolló el séptimo paro general contra el gobierno de Fernando De la Rúa. El acatamiento fue importante, generalizado y conflictivo. Hubo incidentes graves en la provincia de Neuquén y en otros focos de conflicto. En Mendoza, un grupo de treinta personas irrumpió en una sucursal de la cadena de supermercados Átomo y se llevó alimentos. En la provincia de Buenos Aires, un grupo de manifestantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que participaba de una protesta convocada por la CGT Disidente ingresó en la Municipalidad de Pergamino y provocó daños. Fueron desalojados por la Gendarmería Nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tres taxis fueron incendiados. En la ciudad de La Plata, una bomba molotov explotó en la madrugada frente a una sucursal del Banco Nación y provocó la rotura de los vidrios. Otra bomba detonó en la ciudad de Mar del Plata en una sucursal del Banco Francés del barrio Constitución¹⁹.

Las fuerzas de seguridad parecieron no comprender la magnitud del conflicto latente que estallaría días después. El jefe de Gendarmería Nacional, comandante general Hugo Miranda, sostuvo en una entrevista periodística que había condiciones generalizadas de protesta contra algunas medidas, pero no evidencias de una pueblada “... entendida como un masivo uso de la violencia. Si bien, hay situaciones de cortes de ruta y demás, se van manejando en parámetros más racionales. No han aparecido grupos radicalizados porque la gente los rechaza, con lo que se impide que una cuestión menor se transforme en un gran problema”²⁰.

4.2. Consulta Popular “Ningún hogar pobre en Argentina”

Entre el 14 y el 17 de diciembre se llevó a cabo, en todo el país, una Consulta Popular para promover la implementación de un Seguro de Empleo y Formación de \$380 para cada jefe o jefa de hogar desocupado, una Asignación Universal de \$60 por hijo menor de 18 años para todos los trabajadores y una Asignación Universal de \$150 para personas que se encuentran en edad jubilatoria y no tienen cobertura previsional. La propuesta fue impulsada por el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), espacio integrado por organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, empresarias, políticas, de derechos humanos, eclesiales y estudiantiles, bajo la consigna: "Ningún hogar pobre en la Argentina".

Conforme al recuento final de los sufragios emitidos realizado por el FRENAPO, fueron 3.083.191 personas las que se manifestaron a favor de la propuesta.

¹⁷ Ésta es la expresión con la que tal medida financiera fue denominada popularmente.

¹⁸ La Cámara de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) había convocado a oscurecer las vidrieras e incluso los carteles luminosos de cines y teatros.

¹⁹ Diario La Nación, 14/12/01.

²⁰ Diario La Nación, 14/12/01.

4.3. Las protestas posteriores

Los días siguientes de diciembre estuvieron marcados por diversas manifestaciones de protesta. La “tensión” fue admitida por el ministro de trabajo José Dumón y se hizo palpable en todo el país. De modo urgente, los gobiernos locales intentaron, a través de la implementación de planes asistenciales de emergencia, paliar el violento descontento²¹.

El 18 de diciembre, un grupo de 60 personas irrumpió en un minimercado de la cadena Día en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para llevarse alimentos. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, unas 500 personas saquearon varios comercios. Estos acontecimientos fueron percibidos como detonantes de la crisis. Todos evocaron la crisis de 1989, que obligó al presidente Raúl Alfonsín a abandonar su cargo antes de finalizar su mandato constitucional.

Según algunos observadores, el Gobierno tenía dos discursos. Uno minimizaba el conflicto. Fue el que exhibieron el ministro de infraestructura, Carlos Bastos y el titular de justicia, Jorge De la Rúa. El primero destacó que los manifestantes pedían comida y no saqueaban comercios. Jorge De la Rúa dijo que se trataba de hechos “acotados”. El presidente les había pedido “no dramatizar” y “salir a atender la emergencia”²².

Sin embargo, en el gabinete hubo consenso para reimplantar los planes Trabajar y establecer un sistema reforzado de ayuda alimentaria. El ministro del Interior, Ramón Mestre, destacó que si bien había cierto componente político en las protestas no podía ocultarse la situación “muy delicada” y con un “alto nivel de conflictividad”²³.

El mismo día 18, el presidente De la Rúa se refirió al tema: “No encontramos motivos para que haya una magnificación de estos episodios. El problema existe, pero no debe ser motivo de alarma o de hablar de un conflicto general”²⁴.

²¹ “En Rosario. Llegó la calma con la distribución de 8 mil cajas de comida (...) En Concordia hubo un intento de saqueo que frustró la presencia policial. Se entregó comida a chicos desnutridos, mujeres embarazadas y discapacitados. En Córdoba se dispuso un refuerzo de bolsones alimentarios para los sectores más pobres. También se entregarán bolsones adicionales con productos navideños. En el Gran Buenos Aires, además del saqueo en San Martín, hubo entrega de productos en un supermercado Sol de Villa Martelli (...) Se advirtió un incremento del 30 por ciento en la seguridad de los supermercados, más patrulleros, personal policial y hasta vallados (...) En La Plata. Desocupados de Quilmes, Lanús y Berazategui reclamaron planes Trabajar frente al Ministerio de Trabajo. El intendente de Quilmes, Luis Geronés, dijo que los municipios no tienen recursos para dar respuestas a la gente” (Diario Clarín, 19/12/01).

²² Diario Clarín, 19/12/01.

²³ Diario Clarín, 19/12/01.

²⁴ Diario Clarín, 19/12/0. En aquellos días los medios de comunicación ofrecían distintas interpretaciones a los hechos que sucedían. Una nota publicada en el diario La Nación el 19 de diciembre, por ejemplo, ofrecía una interpretación posible de lo que estaba ocurriendo: “La protesta social parecía contenida incluso en sus manifestaciones públicas más duras, como los cortes de ruta. El Gobierno, lo que incluye a las fuerzas de seguridad, tomó este año los piquetes como una válvula de escape para el descontento (...) Al entenderlos como una buena manera de encauzar controladamente el mal humor popular se los dejó multiplicarse (...) Los saqueos a supermercados dieron una alarma diferente. Los piquetes tienen referentes conocidos y con tendencia a la negociación. Se sabe cuándo empiezan y cuándo terminan. El miedo de los funcionarios de seguridad es que los saqueos no tienen esa previsibilidad. La izquierda política que está cerca de los piqueteros pidió a su gente que ni se acerque a los supermercados. La Corriente Clasista y Combativa, que hace meses tomó la decisión de plantar a los piqueteros en la puerta de los mercados para reclamar alimentos por presión, tampoco aparece esta vez al frente de los sucesos. Pero alguien azuzó el fuego de los manifestantes de Concordia, Mendoza y Rosario, razonan quienes tienen partes diarias sobre la situación

4.4. Los saqueos del 19 de diciembre

El 19 de diciembre se produjeron en todo el país numerosos saqueos contra negocios, especialmente de venta de alimentos, casas de electrodomésticos y de indumentaria. En algunos casos, en particular en la provincia de Buenos Aires, la policía no intervino de modo efectivo. En muchos otros, incluso a pesar de la presencia de niños y mujeres entre las personas que reclamaban comida, se produjeron enfrentamientos innecesarios con los agentes de seguridad. En muchos lugares, los propios comerciantes reaccionaron con armas de fuego frente a los agresores.

Como resultado de la violencia de ese día muchas personas fueron muertas a balazos durante los saqueos a supermercados –los casos en las distintas provincias se relatan más adelante–. Según fuentes oficiales, al menos 138 personas fueron heridas. De ellas, 76 eran policías, la gran mayoría del Gran Buenos Aires²⁵. Algunas fuentes señalaron que hubo al menos 9.000 participantes en las manifestaciones²⁶.

Según describió la prensa, las escenas fueron parecidas en cada lugar. Mujeres con sus bebés en brazos llenaban sus bolsas con cajas de leche o paquetes de yerba o polenta. Muchachos que se llevaban changuitos llenos de productos para las fiestas. Comerciantes desconsolados que trataban de pararlos. Otros optaban por quedarse a un costado, resignarse y tratar de salvar lo poco que quedaba.

Aun en donde no existieron problemas, el pánico quedó sembrado. Incluso en algunos lugares como la provincia de Buenos Aires, la propia policía se encargó, la noche del 19, de sugerir a muchos vecinos en forma personal que se armaran en defensa de sus bienes.

Algunas de las grandes cadenas de supermercados preferían llegar a acuerdos con los vecinos y entregar bolsas de comida para apaciguar los ánimos y evitar irrupciones violentas.

En la provincia de Buenos Aires, según información de la Superintendencia General de Policía del Ministerio de Seguridad, a la medianoche del 20 de diciembre del 2001, 2.213 personas fueron “conducidas a dependencias policiales” con motivo de los saqueos a supermercados. De ellas, al menos 325 eran menores de 18 años.

5. El estado de sitio, Decreto 1678/01 del Poder Ejecutivo Nacional

En este marco, durante la tarde del 19 de diciembre²⁷, el presidente Fernando De la Rúa declaró el estado de sitio en todo el país.

social del país. No tienen respuesta a quién está detrás”. Según se dijo allí, la administración De la Rúa también repitió el esquema de respuesta que aplicó durante el año: “si no hay intervención de un juez federal, el compromiso deben resolverlo las autoridades locales (...) El problema quedó en evidencia varias veces en estos meses, es que las policías locales no siempre están preparadas, con medios y mentalmente, para enfrentar estos casos y su participación inadecuada puede aumentar la tensión en la zona”.

²⁵ Diario Clarín, 20/12/01.

²⁶ Diario Clarín, 20/12/01.

²⁷ Ese día el presidente De la Rúa estuvo reunido con la mayoría de sus ministros, entre los que se encontraban Ramón Mestre, Domingo Cavallo, Jorge De la Rúa, José Dumón, Horacio Jaunarena, Daniel Sartor, y el ex presidente Raúl Alfonsín.

La Constitución Nacional determina en su artículo 23 que: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”.

El estado de sitio se implantó tres veces desde el regreso a la democracia en 1983. Raúl Alfonsín impuso esta medida por primera vez, el 25 de octubre de 1985 —y hasta el 9 de diciembre de ese año—. Previamente, el 21 de octubre el gobierno había dispuesto el arresto del consultor Rosendo Fraga, del represor Guillermo Suárez Mason y de otras 10 personas. Esas detenciones, dictadas sin orden judicial, provocaron fuertes críticas que el gobierno intentó paliar decretando el Estado de sitio con posterioridad. El 29 de mayo de 1989 —con el acuerdo del entonces presidente electo, Carlos Menem—, Raúl Alfonsín volvió a hacer uso de esta facultad ante la ola de saqueos a supermercados. La medida se extendió hasta el 27 de junio; en ese lapso, 57 personas fueron arrestadas. Carlos Menem implantó el estado de sitio el 3 de diciembre de 1990 como respuesta a un alzamiento militar carapintada comandado por el entonces coronel Mohamed Alí Seineldín. Una vez sofocado el levantamiento, dos días después, el Estado de sitio se levantó.

En diciembre, el decreto 1.678/01, lleva las firmas del presidente Fernando De la Rúa, el jefe de gabinete, Chrystian Colombo, y el ministro del interior, Ramón Mestre. Dispone que:

“VISTO los hechos de violencia generados por grupos de personas que en forma organizada promueven tumultos y saqueos en comercios de diversa naturaleza y CONSIDERANDO: Que han acontecido en el país actos de violencia colectiva que han provocado daños y puesto en peligro personas y bienes, con una magnitud que implica un estado de conmoción interior.

Que esta situación merece ser atendida por el Gobierno Federal ejercitando todas las facultades que la CONSTITUCION NACIONAL le otorga, a fin de resguardar el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha consultado con las autoridades locales sobre la conveniencia y urgencia de esta medida.

Que encontrándose el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION en receso de sus sesiones ordinarias, corresponde a este PODER EJECUTIVO NACIONAL resolver en lo inmediato e incluir el tratamiento de lo dispuesto por el presente decreto en el temario de sesiones extraordinarias.

Que el presente se dicta en virtud de lo dispuesto por los artículos 23 y 99, inciso 16, de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA DECRETA:

ARTICULO 1: Declárase el estado de sitio en todo el territorio de la Nación Argentina, por el plazo de treinta días.

ARTICULO 2: Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION e inclúyese la declaración del estado de sitio entre los asuntos a considerar en el actual período de sesiones extraordinarias, a cuyo efecto se remite el correspondiente mensaje.

ARTICULO 3: El presente decreto regirá a partir de su dictado.

ARTICULO 4: Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.”

5.1. La inconstitucionalidad del estado de sitio

La suspensión de garantías constitucionales como reacción estatal frente al conflicto social fue una salida institucional cuestionable. En este sentido, el CELS y otras organizaciones impugnaron judicialmente la validez del decreto que establecía el estado de sitio.

El estado de sitio es una medida excepcional que sólo puede dictarse en situaciones de emergencia, pues restringe las garantías constitucionales. La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos incorporados a ella establecen que se trata de una medida de última *ratio* y por ello prevén un conjunto de requisitos que deben cumplirse.

La medida decretada por el Ejecutivo fue inconstitucional, pues sólo el Congreso puede declararla en caso de conmoción interior, tal como lo establece el artículo 75 inciso 29 de la Constitución Nacional. El Presidente sólo puede recurrir a esta medida en caso de que el Congreso se encuentre “en receso”, es decir, en período de vacaciones. Sin embargo, al momento de dictarse el decreto 1.678/01 el Congreso estaba sesionando.

Por otra parte, los hechos acaecidos en Argentina no constituían una conmoción interior en los términos del artículo 23 de la Constitución Nacional ni tampoco encuadran en las causas descriptas en el artículo 4 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el que exige que la emergencia ponga en riesgo “la vida misma de la Nación”.

A su vez, las medidas que se adopten como consecuencia del estado de sitio deben guardar relación con el fin buscado por esta excepción, esto es, deben ser razonables. En este caso, la causa alegada no está suficientemente explicitada en el decreto, lo cual impide que las medidas que se adopten sean sometidas al debido control de razonabilidad²⁸.

Por otra parte, la suspensión de las garantías constitucionales debe tener estrictos límites temporales y materiales para ser legítima. No obstante, el decreto se dictó respecto de todo el territorio nacional y por treinta días, sin justificación alguna acerca de la necesidad de tal extensión territorial o del plazo fijado.

Es preciso tener en cuenta que la enorme cantidad de detenciones que se produjeron esos días, no fueron dictadas en virtud de ninguna orden escrita. Esto es, únicamente en 29 casos existió un decreto que ordenaba la detención de esas personas en virtud del estado de sitio. El resto de las detenciones fueron absolutamente ilegítimas.

En virtud de las detenciones que se produjeron a raíz de esta declaración, se interpusieron acciones de hábeas corpus a fin de que el juez en turno asegurara la libertad de los ciudadanos. Cerca de la medianoche del día 20, el Dr. Grispo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 18 de la Capital Federal dispuso la libertad de todas las personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que entonces eran aproximadamente 100 en la Ciudad de Buenos Aires. El argumento central de la decisión era que no había existido “orden escrita de autoridad competente” para privar de la libertad a los ciudadanos²⁹.

²⁸ La Corte IDH ha establecido que “La juridicidad de las medidas que se adopten para enfrentar cada una de las situaciones especiales a que se refiere el art. 27.1 dependerá, entonces, el carácter, intensidad, profundidad y particular contexto de la emergencia, así como de la proporcionalidad y razonabilidad que guarden las medidas adoptadas respecto de ella” (Corte IDH, Opinión Consultiva OC- 8/87, “El hábeas corpus bajo suspensión de garantías”, del 30 de enero de 1987, par. 22).

²⁹ El Decreto 1.680/01 PEN anotó a disposición del PEN únicamente a 19 personas. Según informó la Policía Federal Argentina se estaban confeccionando las listas para la emisión de otro decreto que incluyese a otros 161 detenidos, cuando se hizo pública la renuncia del presidente De la Rúa.

Como ya expusimos, las investigaciones posteriores revelaron que en la Ciudad de Buenos Aires se produjeron 190 detenciones en relación con el estado de sitio. Veintinueve personas llegaron a ser puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que expresamente dictó el 20 de diciembre el decreto 1.682/01, en el que se incorporó un anexo con sus nombres. Con relación a las 161 personas restantes, se estaba trabajando en la confección de su listado a fin de preparar el dictado del correspondiente decreto, cuando se hizo pública la renuncia del presidente De la Rúa, según fue informado a la jueza que investiga los hechos, por la Superintendencia de Seguridad Ciudadana de la Policía Federal Argentina. Ese día en la Ciudad de Buenos Aires hubo también más de 250 detenciones en relación con delitos comunes.

Analizando los horarios en los que cada una de estas detenciones se produjo, se advierte que hubo dos picos en la intervención policial el día jueves 20 de diciembre del 2001, entre las 10.00 y las 13.00 hs. y entre las 17.00 y las 19.00 hs.

6. La represión de las protestas del 19 y el 20 de diciembre y la renuncia del Gobierno

6.1. El “cacerolazo” del miércoles 19 de diciembre

Luego de decretar el estado de sitio, el presidente Fernando De la Rúa se dirigió públicamente al país en un mensaje televisivo. En su discurso convocó infructuosamente a las fuerzas opositoras a colaborar en el sostenimiento de la gestión de gobierno. Casi simultáneamente en todo el país, y especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, muchísimas personas salieron de sus casas y confluyeron en una masiva protesta popular expresada en el golpe de las cacerolas, ocuparon la calle y espontáneamente se dirigieron en grandes columnas hacia a la Plaza de Mayo.

6.2. La renuncia del gabinete de Fernando De la Rúa

Pasada la medianoche, comenzaron a circular versiones periodísticas sobre posibles renuncias en el Gabinete. Al primero que se mencionó para abandonar su cargo fue al ministro de economía, Domingo Cavallo. Finalmente, todo el gabinete de gobierno de Fernando De la Rúa presentó su renuncia esa noche para permitirle al presidente la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo con el justicialismo. Por su parte, fuentes del bloque del PJ indicaban que plantearían a De la Rúa la posibilidad de convocar a una asamblea legislativa si no era modificado el rumbo económico³⁰.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) convocó a un paro para el día jueves y todos los sectores discutían los pasos a seguir.

6.3. La represión del jueves 20 de diciembre

A la una de la madrugada del jueves 20 de diciembre, al mismo tiempo en que se difundía por televisión la renuncia de Domingo Cavallo, la Policía Federal destacada en la Plaza de Mayo comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes que se habían congregado allí, pacífica y ruidosamente. No fueron respetados ancianos, mujeres o chicos. La reacción policial fue injustificada.

³⁰ Clarín Digital, 19/12/01.

Frente a ello, muchos manifestantes volvieron a sus casas o se alejaron considerablemente de la zona de la Plaza de Mayo y de la Plaza de los Dos Congresos. Sin embargo, grupos numerosos, más activos, permanecieron en el lugar y resistieron la intervención policial. A partir de entonces se produjeron incendios, pedradas en distintos lugares de la zona céntrica. Todos los participantes de la virtual pueblada permanecían en la periferia y parte de ellos continuaban avanzando sobre la Plaza de Mayo. La situación se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

Con el correr de las horas, entrada ya la mañana y a plena luz, muchos manifestantes volvieron a congregarse en la Plaza de Mayo y el Congreso Nacional. Hacia las dos de la tarde, grupos heterogéneos convergían sobre la plaza: partidos de izquierda y la Corriente Clasista Combativa (CCC) de La Matanza, marchaban hacia allí junto a oficinistas, con sus trajes y maletines.

Media hora más tarde y aunque la situación era tranquila, la Policía Federal intervino nuevamente. Primero se escucharon sirenas. Luego llegaron carros de asalto y se armó la primera fila de la Guardia de Infantería con cuya intervención comenzó la represión. La intervención policial fue ilegítima. Se trató de una reacción excesivamente violenta frente a un conjunto de personas que, al tiempo de la intervención policial, manifestaban pacíficamente.

Frente a ello, algunos grupos reaccionaron arrojando piedras, palos y adoquines contra los agentes policiales y contra algunos edificios públicos o bancos. Los tachos de basura y los bancos de la plaza fueron incendiados y con ellos se montaron barricadas. Todos corrían sin sentido, hacia un lado y otro.

Una hora más tarde, la policía había logrado montar su centro de operaciones en Rivadavia y Entre Ríos. Los manifestantes habían quedado repartidos en varias esquinas. Mientras la policía reprimía a los manifestantes frente al Congreso Nacional, a sólo dos cuadras de allí eran devastados varios comercios³¹. Estos enfrentamientos urbanos se sucedieron hasta la noche³².

La jueza federal María Romilda Servini de Cubría se hizo presente en la Plaza de Mayo durante el momento más álgido de la represión y ordenó a los jefes policiales a cargo, el cese inmediato de la represión. Su orden, sin embargo, no fue acatada. Los jefes policiales respondieron que el ministro del Interior había dispuesto desalojar la totalidad de la Plaza de Mayo.

En este contexto fueron heridos de bala y perdieron la vida al menos cinco personas: Diego Lamagna (26), Alberto Márquez (57), Marcelo Gastón Riva (30), Carlos Almirón (24), Gustavo Benedetto (23). Al menos cinco personas más recibieron heridas de bala de plomo. Otros muchos, incontables, sufrieron golpes, empujones de caballo y padecieron el efecto de los agresivos químicos.

Diego Lamagna, Alberto Márquez, Marcelo Gastón Riva y Carlos Almirón, murieron como consecuencia del impacto de balas de plomo. Las pericias efectuadas en la investigación judicial indican que los proyectiles hallados en sus cuerpos guardan similitud con los perdigones que conforman los cartuchos de propósito general (de plomo) para escopetas calibre 12/70. Las escopetas calibre 12/70 son las que la policía utilizó, entre otras armas, para disparar munición antitumulto contra los manifestantes.

³¹ Un local de Mc Donald's, uno de Blockbuster y un supermercado Eki.

³² Diario Clarín, 21/12/01.

Conforme ciertos testimonios, algunos de ellos fueron muertos por personal policial que desde una camioneta sin identificación disparó contra la gente. Según reveló la autopsia, Alberto Márquez recibió dos balazos por la espalda.

De acuerdo a lo informado el 21 de diciembre por el Director General de Operaciones de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, comisario Edgardo Gaudiero, al menos 82 agentes fueron heridos. El comisario Gaudiero fue uno de los oficiales con mayor responsabilidad en la dirección del operativo.

6.4. La situación en el interior del país

6.4.1. Las víctimas en la provincia de Buenos Aires

La represión de las movilizaciones sociales en el Gran Buenos Aires se enmarcó en un estado general de violencia causado por la amenaza de saqueos a pequeños comercios que se vivió desde el martes 18 de diciembre.

Las víctimas en la provincia de Buenos Aires se concentraron en los partidos del Conurbano y, en general, se trató de muertes provocadas por heridas de armas de fuego en represiones de saqueos o de tumultos frente a supermercados. El día 19 de diciembre murieron 8 personas, todas víctimas de disparos de armas de fuego y, en general, no se ha podido identificar a los responsables de estas muertes.

Diego Ávila (24 años) murió en Villa Fiorito, Lomas de Zamora. A *Julio Hernán Flores*, de 15 años, lo mató un comerciante en la localidad de Merlo, cuando participaba de un saqueo³³. En Gregorio de Laferrere fueron muertos *Damián Vicente Ramírez* (14 años) y *Ariel Maximiliano Salas*, de 30 años. *Pablo Marcelo Guías* (23 años) murió en Francisco Solano, Quilmes. En Don Orión, partido de Almirante Brown, *Víctor Ariel Enrique*³⁴, de 21 años, y *Roberto Agustín Gramajo*, (19 años), perdieron la vida de manera violenta³⁵. El joven *Eduardo Legembre* tenía 20 años cuando murió en Castelar, víctima del disparo de un comerciante que resistía el saqueo de su negocio³⁶.

El 20 de diciembre, sólo se registró un fallecimiento. *Mariela Rosales* de 28 años murió en Villa Centenario en el partido de Lomas de Zamora. En la investigación de su muerte interviene el fiscal Gualteni.

³³ Diario Página/12, 21/12/01. Diario Crónica, 21/12/01.

³⁴ Diario Página/12, 21/12/01. Diario Crónica, 21/12/01.

³⁵ Roberto Agustín Gramajo falleció el 19 de diciembre del 2001, en la esquina de las calles 9 y 26 del barrio Don Orión, partido de Almirante Brown. Su muerte fue provocada por un disparo de arma de fuego. Según denunció al CELS Diego Ismael Tauil, abogado patrocinante de la familia Gramajo, desde el 19 de diciembre del 2001 hasta el 2 de enero del 2002, el fiscal interviniente no adoptó ninguna medida de investigación relevante. Según el abogado, no se solicitó el secuestro de las armas del personal policial que actuó, ni se tomó declaración al personal de esa fuerza policial hasta el 5 de marzo del 2002. Tauil también destacó que la fiscalía no ordenó ningún relevamiento de la zona en busca de testigos del hecho. Diario Página/12, 21/12/01. Diario Crónica, 21/12/01.

³⁶ Diario Clarín, 20/12/01. Diario Crónica 20/12/01.

6.4.2. Las víctimas en la provincia de Santa Fe*

Graciela Acosta (35 años) –ciudad de Rosario–.

Graciela Acosta tenía siete hijos y era una activa militante social y de derechos humanos en su comunidad. La tarde del 19 de diciembre del 2001 se encontraba con su amiga y compañera Mónica Cabrera³⁷, buscando a sus hijos a unos 200 metros del supermercado La Gallega de Villa Gobernador Gálvez. Desde ese lugar pudieron ver cómo frente al supermercado se agolpaba casi un millar de personas frente al cordón policial formado con agentes armados con escopetas y pistolas.

La situación se mantuvo tranquila hasta que, luego de que un policía empujara a una manifestante, comenzaron la conmoción y la lluvia de balas. Uno de los periodistas presentes, Eduardo Nocetti, sostuvo que al ver la forma en que la policía disparaba, se acercó a los agentes para preguntarles si estaban disparando balas de goma con las pistolas. Los policías le contestaron: "...a los negros estos si no le damos con plomo, no los paramos con nada"³⁸.

Mientras esto ocurría, Graciela Acosta alertó a su amiga sobre los disparos cuando cayó imprevistamente de rodillas. Como se encontraban lejos del supermercado, Cabrera pensó que se trataba de una bala de goma perdida, pero al levantar la vista vio a un policía que todavía les apuntaba con su arma reglamentaria. Era el agente Ponce, de la seccional 29 de Villa Gobernador Galvez.

De acuerdo con el informe de la autopsia, Graciela Acosta recibió un impacto de un proyectil 9 mm. que ingresó por debajo de una tetilla y le ocasionó graves daños internos que, horas más tarde, le causaron la muerte.

Hasta la fecha y a pesar de que los testigos principales del hecho han sido objeto de numerosas intimidaciones³⁹, el Juzgado de Instrucción no ha dispuesto ninguna medida de prueba tendiente a determinar la identidad del policía autor del disparo (estas medidas podrían ser el reconocimiento en rueda o la pericia balística sobre las armas reglamentarias, entre otras opciones). Vale la pena agregar, como muestra importante de la actitud pasiva asumida por la agencia judicial, que las actuaciones correspondientes al episodio quedaron en manos del Jefe del Operativo hasta fines del mes de febrero del 2002.

* Esta sección del capítulo ha sido elaborada en base al informe de Florencia Barrera, Enrique Font, Gabriel Ganón, Alejandro López, Paula Moretti y Ana Oberlin, investigadores de la Sección de Criminología y Política Criminal del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos (CEIDH) de la UNR, quienes contaron con la colaboración de todo el equipo de redacción del periódico *El Eslabón de la Cadena Informativa* (www.eleslabon.com).

³⁷ Activa militante social que anteriormente recibiera fuertes amenazas por parte del actual jefe de policía de la Seccional 29, responsable del operativo del 19 de diciembre.

³⁸ Este periodista relató que varios policías, en plena represión, cortaban las cadenas de las bicicletas (de las personas que huían) y las cargaban a una camioneta roja que suele utilizar la policía de Villa Gobernador Galvez.

³⁹ Durante varios días, un efectivo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) permaneció apostado en la puerta del edificio donde vive Mónica Cabrera. Una noche, dos disparos sonaron debajo de su ventana, ella bajó de inmediato y juntó las vainas servidas de dos 9mm. Además, la policía de Villa Gobernador Galvez detuvo a un grupo de jóvenes, vecinos de Cabrera, diciéndoles que se los llevaban porque "Cabrera los había denunciado", sin advertir, uno de los hijos de Mónica estaba entre los detenidos. Durante un mes no pudo participar en sus actividades de militancia porque "era seguida por un móvil que se me paraba al lado y espantaba a la gente". Por su parte, el periodista Eduardo Nocetti recibió una amenaza telefónica y, en dos días consecutivos, policías de la Seccional 2º se presentaron por la madrugada en la radio LT8 donde trabaja, con la excusa que debían citarlo para la audiencia testimonial.

Walter Campos (17 años) –ciudad de Rosario–.

Walter Campos murió el 20 de diciembre mientras esperaba ayuda alimentaria con sus vecinos en un centro comunitario del barrio de Empalme Graneros. La impaciencia por la espera generó cierto malestar que, alrededor de las 10.30 hs, comenzó a manifestarse en discusiones y corridas. Walter Campos y otro joven, habrían amenazado a una de las personas que se encargaba de repartir los bolsones de comida. A raíz de ello, personal policial comenzó a perseguirlos. Cuando esto ocurrió, el resto de policías presentes comenzaron a disparar hacia la gente.

Numerosos testigos relataron lo sucedido con los jóvenes. Algunos sostienen que Campos tenía un arma en la mano, aunque no la disparó. También recuerdan que el muchacho y su compañero cruzaron el arroyo Ludueña. Después de eso, el joven se desvió y se detuvo en una pequeña calle paralela a las vías. Según sus familiares habría necesitado dejar de correr en razón de los problemas cardíacos que padecía. En ese momento, un francotirador policial que se encontraba apostado en la otra orilla del arroyo le habría disparado mortalmente a la cabeza.

Sin embargo, de acuerdo con la interpretación policial, Walter Campos y su amigo dispararon al ser perseguidos por la policía. Esto no dejó otra alternativa al francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que efectuar un disparo mortal. Resulta evidente la irracionalidad del medio empleado por el francotirador, quien tuvo la opción de disparar a herir, si era necesario detener a Campos.

En la causa judicial en la que se investiga esta muerte, se encuentra detenido a disposición del juez de instrucción Dr. Barbero, el policía que efectuó el disparo. Sin embargo, al cierre de este Informe, ninguno de los testigos ha sido citado a declarar.

Juan Alberto Delgado (28 años) –ciudad de Rosario–.

Juan Alberto Delgado, era changarín. Murió el 19 de diciembre, cuando junto con un grupo de entre 150 y 200 personas, esperaba la entrega de bolsones de comida en las calles Necochea y Cochabamba de Rosario.

De acuerdo con el relato de los testigos, la inesperada represión comenzó cuando el dueño de un supermercado estacionó un camión frente a su comercio. En ese momento, todos los presentes creyeron que el comerciante estacionaba el camión con el fin de entregarles mercaderías, por lo que se agolparon a su alrededor.

Mientras la gente corría hacia el lugar, móviles pertenecientes al comando radioeléctrico ingresaron a la zona a gran velocidad. Los patrulleros traían las puertas abiertas para permitir que, al avanzar, los policías efectuaran disparos de escopetas al aire desde el interior del vehículo. De tal forma, los manifestantes quedaron encerrados entre los móviles que llegaron y los cordones policiales que se habían dispuesto previamente. Los policías comenzaron a golpear a los manifestantes.

De acuerdo a los testimonios de los presentes, Juan intentaba, como muchos, escapar de la represión. Sin embargo, fue herido por algunos disparos y derribado por un policía que le puso su “cachiporra” entre las pantorrillas. Cuando intentaba levantarse, un policía de la seccional apodado “Toro” intentó dispararle con su itaka, pero no pudo porque ya había agotado su carga. Al advertirlo, extrajo entre sus ropas un revólver y le disparó. Minutos después, una ambulancia recogió a Delgado y lo trasladó al hospital a donde llegó muerto. Su hermana afirma que el policía “Toro” mató al joven “ porque se la tenía jurada” ya que

años antes habían tenido un incidente. Otro testigo contó que el policía, antes de dispararle, le dijo: “acá te tengo, che perro”.

La autopsia da fuerte sustento al relato de los testigos y familiares porque acredita que Delgado no sólo recibió ocho disparos de arma de fuego, sino que además su cuerpo presentaba fuertes golpes y heridas de balas de goma.

En contraposición a la versión de los testigos, el jefe a cargo del operativo policial, realizó cuidadosamente un acta de procedimiento en la que los hechos se relatan de manera contraria. Dicho documento afirma que al llegar el comerciante con su camión, los manifestantes comenzaron a arrojar piedras y a disparar armas de fuego hacia los cordones policiales. Según la versión oficial, la confusión y conmoción provocadas por este episodio obligó, por un lado, a los patrulleros a dar apoyo preventivo, y por otro lado, a los policías a utilizar sus armas para repeler estas agresiones. Cuando terminó el procedimiento de dispersión de los manifestantes, los agentes encontraron en forma casual el cuerpo mortalmente herido de Delgado junto con otras personas que yacían en el piso, en cumplimiento de las órdenes policiales.

La causa está caratulada como homicidio, pero a pesar de la autopsia y los numerosos testimonios, ningún policía ha sido imputado por este hecho.

Yanina García (18 años) –ciudad de Rosario–.

La joven murió en la zona de Pasco y Gutemberg en la ciudad de Rosario, tras recibir un disparo en el abdomen cuando, desesperada por los ruidos de las balas, salió a la vereda a buscar a su pequeña hija.

Claudio Lepratti (38 años) –ciudad de Rosario–.

Claudio Lepratti, graduado universitario en Filosofía, murió el 20 de diciembre, víctima de un disparo de escopeta con munición de plomo que le atravesó la tráquea. El hombre se encontraba en el techo de la Escuela 756 del barrio Las Flores, donde trabajaba como cocinero del comedor. Los supuestos autores del disparo, procesados a la fecha por homicidio simple, son los agentes policiales Esteban Velázquez y Rubén Pérez. De acuerdo a la versión de los numerosos testigos, ambos policías descendieron del móvil 2270 del Comando Radioeléctrico y dispararon hacia el lugar donde se encontraba Lepratti. La pericia aún no determinó cuál de las dos armas oficiales dio en el blanco.

Ricardo Villalba (16 años) –ciudad de Rosario–.

Ricardo Villalba murió el día 19 de diciembre en dudosas circunstancias, frente a la mirada atónita de los habitantes del Barrio Parque Casas. Ese día, al igual que en el resto de la ciudad, los vecinos ocuparon las calles reclamando comida. A los pocos minutos, numerosos móviles policiales entraron al barrio a gran velocidad disparando balas de goma y gases lacrimógenos, según los testimonios de los vecinos. Durante este violento despliegue policial, Ricardo Villalba fue asesinado.

Sin embargo, nadie vio al joven en la manifestación y, según las versiones, el chico se encontraba con un amigo a una cuadra del lugar. Los testigos afirman que Villalba y su amigo corrieron al ver acercarse los móviles y que un policía se bajó del patrullero y, rodilla en tierra, les disparó. La bala impactó en uno de los ojos del joven.

Los manifestantes se acercaron para asistir Villalba. Una vecina llamó a una ambulancia que nunca llegó. De todos modos, lograron trasladarlo al hospital, donde falleció. Días más

tarde se realizaron allanamientos y detenciones en el barrio, que según los vecinos, buscaban amedrentar a cualquier probable testigo.

Hasta que el abogado Carlos Varela no intervino en la causa, el juzgado no había dispuesto ninguna medida probatoria. Los policías que declararon no lo hicieron en calidad de imputados. Hasta el momento, el abogado ha presentado dos testigos que estarían dispuestos a realizar un reconocimiento del homicida.

Rubén Pereyra (20 años) –ciudad de Rosario–.

Murió como consecuencia del disparo de una bala de plomo, en el barrio Las Flores.

Marcelo Pacini (15 años) –ciudad de Santa Fe– .

Marcelo Pacini, pertenecía a una familia humilde de 11 hermanos. El 19 de diciembre falleció al recibir un balazo en el rostro. En un hecho confuso, algunos testigos informaron que fue baleado por un farmacéutico, sin embargo la esposa de la víctima negó esa versión⁴⁰. Según lo informado por el diario El Litoral (21/12/01) el comerciante (Víctor Hugo Clemente) habría confesado en sede policial que accionó la escopeta de donde salió el disparo.

6.4.3. La víctima de la provincia de Córdoba

David Ernesto Moreno (13 años)

David E. Moreno falleció al recibir un impacto de bala cuando intentaba ingresar a un pequeño comercio del barrio Villa 9 de Julio, en la ciudad de Córdoba.

La muerte se produjo cuando efectivos de la Policía provincial dispararon contra un grupo de vecinos que desde la noche del miércoles se encontraba frente al supermercado Mini Sol ubicado al 8000 de calle Piedra Labrada. La policía arremetió contra la multitud provocando la huida de la gente que pedía bolsones de alimentos. En la confusión, el cuerpo del joven quedó tendido en la esquina del supermercado. Un móvil policial lo trasladó hasta el dispensario del barrio Argüello, al que llegó sin vida, con una herida en la cabeza y marcas de balas de goma y perdigones en el cuerpo⁴¹.

6.4.4. Las víctimas de la provincia de Corrientes

Roberto Alberto Arapi⁴² (22 años)

El 20 de diciembre en la ciudad de Corrientes, en el marco de un operativo policial general desarrollado a raíz de los incidentes y saqueos que se produjeron en distintos puntos de la capital provincial, Ramón Alberto Arapi (22 años) fue asesinado por una comisión policial en el Barrio Nuevo. Era hijo de una familia humilde a la cual ayudaba trabajando como changarín, como beneficiario de un Plan Trabajar.

Esa noche se encontraba tomando *tereré* con un grupo de amigos, cuando fue sorprendido por los disparos de armas de fuego de una comisión policial de la Comisaría XIII que se

⁴⁰ Información brindada por Juan Ticiani, corresponsal de Rosario/12 en la ciudad de Santa Fe, al equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que elaboró este apartado.

⁴¹ Diario La Voz del Interior de Córdoba, 21/12/01.

⁴² Fuente: Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes.

desplazaba en el móvil de esa delegación: una camioneta Ford, color bordó, con vidrios polarizados y sin patentes.

La investigación se encuentra a cargo del juez Mario Payes en el Juzgado N° 1. Ya han declarado en la causa numerosos vecinos del barrio que presenciaron los hechos e identificaron a los autores como integrantes de la fuerza policial.

La mayoría de los testigos identificó claramente la camioneta Ford F 100 bordó, como perteneciente a la Comisaría 13ª, ya que el vehículo circulaba desde hacía tiempo por el barrio, realizando el patrullaje habitual. La camioneta fue secuestrada como parte de la prueba en la causa.

Además, se allanó la Comisaría 13ª y se secuestró el libro de Guardia, en el que resalta una corrección grosera hecha en el horario de regreso de la camioneta el 20 de diciembre.

También se recogieron en el lugar del hecho dos casquillos –que serían del arma reglamentaria policial calibre 9 mm–, se realizaron numerosas diligencias y se tomaron testimonios cruciales para el avance de la investigación.

Juan Alberto Torres (21 años)

Juan Alberto Torres, de 21 años sufrió una herida de arma de fuego en la zona abdominal que le provocó una perforación digestiva. Ingresó al Hospital Escuela a las 3.05 hs. del 20 de diciembre. Fue sometido a cirugía y trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Vidal de la ciudad de Corrientes en donde falleció horas más tarde.

6.4.5. Las víctimas en la provincia de Entre Ríos

Romina Elizabeth Iturain⁴³ (15 años)

Romina Elizabeth Iturain murió el 20 de diciembre del 2001. A las 16.30 hs. se encontraba tomando mate en la casa de su prima cerca del Supermercado Wal Mart de Paraná. Horas antes había comenzado una movilización en los alrededores del comercio. Ante el intento de saqueo, intervino la policía y la gente comenzó a correr para huir de la represión. Una bala ingresó a la vivienda donde se encontraban las jóvenes e impactó en el costado derecho del tórax de Romina. El primo menor de la víctima afirmó que “tiraban desde 200 metros (...) para haberla matado tiene que haber sido una bala grande”. Según la versión oficial, la chica murió por balas disparadas desde barrios aledaños al supermercado⁴⁴.

Eloísa Paniagua (13 años)

Eloísa Paniagua fue muerta el 20 de diciembre. Aquella mañana había ido con su familia a intentar tomar mercadería de un supermercado en las proximidades de la Villa Macarone. Allí fue alcanzada por una bala –posiblemente de calibre 9 mm– que ingresó por la parte superior de su cabeza y salió por su boca. Pasadas las 21.30 murió en el Hospital San Roque.

Julián Paniagua, padre de Eloísa, relató que el comisario de la Comisaría 8va. conversó ese día con los empleados del supermercado para que aceptaran entregar bolsones de comida. Ante la respuesta positiva de los empleados se corrió la voz, y los vecinos se fueron acercando cuando se avisó que los bolsones estaban listos.

⁴³ Fuente: Rosario Romero, abogada de la familia Iturain.

⁴⁴ Diario El Diario de la ciudad de Paraná, 21/12/01.

Paniagua señaló que, cuando llegaron, la policía y la gendarmería se encontraban en el lugar: “Nos corrieron y entonces nos separamos: los grandes por un lado y los chicos por otro, para evitar que les peguen a los gurises”. Según El Diario, los chicos corrían de vuelta a su barrio con la policía persiguiéndolos a balazos. Uno de esos disparos causó la muerte de Eloísa⁴⁵.

Según la abogada querellante en ese proceso, numerosos testigos destacaron que quien efectuó el disparo letal fue el cabo Silvio Martínez.

José Daniel Rodríguez

José Daniel Rodríguez apareció muerto varios días después del 20 de diciembre en las inmediaciones de un supermercado. Aparentemente no tenía familiares directos y la investigación acerca de su deceso no ha avanzado sustantivamente pero no puede descartarse que haya sido una de las víctimas de la represión de esos días.

6.4.6. Las víctimas en la provincia de Río Negro

Elvira Avaca (46 años)

Elvira Avaca murió el 19 de diciembre. Se encontraba caminando con su hija cuando fue alcanzada por una bala en la zona lumbar y cayó al pavimento. Según la autopsia, la señora Avaca murió debido a una hemorragia interna provocada por las secuelas del paso del proyectil por el bazo, estómago y pulmones. La bala ingresó por su espalda y atravesó su cuerpo en forma horizontal.

La víctima había ido a buscar a su hija a la plaza, donde ésta exponía sus artesanías. Las primeras versiones indicaron que el disparo provenía del techo del supermercado Alarcón, mientras éste era saqueado. Sin embargo, el juez Rubén Norry, si bien confirmó que uno de los dueños del supermercado utilizó un arma calibre 32, manifestó que la bala que mató a Elvira era de un calibre superior y dispuso el secuestro de muchas de las armas de fuego que utilizaron los policías en la represión del miércoles por la noche.

6.4.7. Las víctimas en la provincia de Tucumán

Luis Alberto Fernández (27 años)

Luis Alberto Fernández murió el 22 de diciembre, luego de estar internado en el Hospital Padilla desde el jueves 20. Fernández ingresó al hospital con una herida de bala en la cabeza y se mantuvo en estado crítico sin albergar esperanzas de recuperación.

El jueves a la tarde, Fernández se encontraba, como todos los días, vendiendo sandías frente al Hipermercado Libertad de avenida Roca al 3400. En las inmediaciones del mismo, promediando la tarde, comenzaron a juntarse vecinos para pedir alimentos.

Ante la negativa de los comerciantes, la gente que rodeaba el local convocada para recibir bolsones intentó entrar al supermercado. "De repente empezaron las corridas y los tiros, y vino un gendarme y le disparó a la cabeza desde cerquita", afirmó la esposa del vendedor ambulante al diario La Gaceta de Tucumán⁴⁶.

⁴⁵ Diario El Diario de la ciudad de Paraná, 21/12/01.

⁴⁶ Diario La Gaceta de Tucumán, 21-22-23/12/01

La represión estuvo a cargo de la Gendarmería, la Policía de Tucumán y la Federal. Aunque efectivos de alto rango de las fuerzas afirman que sólo se usaron balas de goma y gases lacrimógenos, testigos del accionar de los uniformados indican que las balas que disparaban ese día eran de plomo.

Los abogados de la familia Fernández, se presentaron ante la Fiscalía VIII a cargo de Joaquina Vermaal y Ernesto Baclini, solicitando que se secuestren todas las armas de Gendarmería y que se proporcione el listado de efectivos intervinientes en la represión.

Fernández tenía 27 años y una hija de 5, y se convirtió en la única víctima fatal de la represión del 20 de diciembre en la provincia de Tucumán.

6.5. La organización de la represión

La ausencia de una causa justificada para la represión, la utilización de armas de fuego en el contexto de una manifestación pública, así como la vulneración de los principios de gradualidad y proporcionalidad en la intervención mostraron de forma evidente la ilegalidad del procedimiento.

Por otra parte, la envergadura del despliegue estatal, la organización de las operaciones de represión y su sostenimiento en el tiempo permiten afirmar que cada uno de los ejecutores finales de las conductas ilícitas descriptas actuó como consecuencia de la intervención de uno o varios responsables funcionales que, a través del dictado de órdenes directas o de una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, gobernaron desde su voluntad la conformación final de los sucesos.

Dada la estructura vertical y jerarquizada de las fuerzas que intervinieron, esta situación ha revelado múltiples infracciones encadenadas a través de las redes de mandos que llegan hasta los funcionarios de máximas jerarquías. Por ello, más allá de la responsabilidad individual que a cada ejecutor corresponde por su actuación en los sucesos de esos días, la responsabilidad penal que de ellos emana alcanza también a quienes estaban investidos con competencia funcional y fáctica para preordenar y dirigir la actuación de las fuerzas de seguridad. Esta extensión de responsabilidad alcanza, al menos, al secretario de Seguridad entonces en funciones, Enrique Mathov, y por ello se encuentra imputado en la causa penal y detenido por orden de la jueza federal Servini de Cubría.

En función de las características que tuvo la práctica represiva antes descripta, muchos organismos⁴⁷ y particulares denunciaron penalmente los hechos. En algunos casos, se imputó como responsable al propio ex presidente Fernando De la Rúa.

Si bien aún es materia de investigación judicial, algunas versiones señalan que en la tarde del 19 de diciembre, poco después de que se dispusiera el estado de sitio, el presidente Fernando De la Rúa y el ministro del Interior, Ramón Mestre, se reunieron con los jefes de las tres fuerzas federales de seguridad: la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal. Las órdenes del presidente, palabras más palabras menos, habrían sido: “Hay que detener los saqueos y la inseguridad que ello genera. Utilicen la fuerza necesaria para restablecer el orden público”.

La pregunta de muchos fue cómo se frenaría el descontrol. La policía no poseía precisiones que le fijaran cómo actuar para controlar y reprimir. El margen de riesgo, ante los crecientes desbordes, fue más amplio de lo esperado.

⁴⁷ Entre ellos el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

6.6. La renuncia de Fernando De la Rúa

En la tarde del 20 de diciembre del 2001, el presidente renunció⁴⁸.

La renuncia manuscrita, remitida por fax al conjunto de gobernadores peronistas por entonces reunidos en la provincia de San Luis decía:

“Al señor presidente provisional del Honorable Senado, ingeniero Ramón Puerta:
Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios.
Confío en que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República.
Pido por eso al Honorable Congreso que tenga a bien aceptarla.
Lo saludo con mi más alta consideración y estima, y pido a Dios por la ventura de mi patria. Fernando De la Rúa”⁴⁹.

Minutos más tarde, Fernando De la Rúa abandonó la casa de gobierno a bordo de un helicóptero y dejó definitivamente el poder⁵⁰.

6.7. La derogación del decreto 1.678/01

El viernes 21 de diciembre por la mañana, antes de que su renuncia fuese aceptada por la Asamblea Legislativa, Fernando De la Rúa concurrió a la Casa Rosada y derogó el decreto de estado de sitio que había implantado el miércoles 19.

7. Los gobiernos posteriores

7.1. Presidencia de Ramón Puerta. El estado de sitio en algunas provincias.

El viernes 21 de diciembre a las 11 de la mañana, la Asamblea Legislativa⁵¹ aceptó la renuncia del presidente De la Rúa. En consecuencia, y en virtud de lo ordenado por la ley

⁴⁸ Según una información periodística que la justicia investiga actualmente, hubo una reunión entre el entonces canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y el secretario de Turismo Hernán Lombardi en los momentos decisivos. En ese encuentro el mayor de los hijos del ex presidente habría tratado de convencerlo para que no renunciara, mientras el entonces Secretario Legal y Técnico, Nicolás Gallo, le advertía que debían alejarse del poder porque había “muchos muertos” en Plaza de Mayo. La reunión se habría llevado a cabo en la casa de gobierno el 20 de diciembre. El presunto diálogo entre De la Rúa, su hijo Antonio y Gallo fue reproducido en su edición del 23 de diciembre por la revista “Trespuntos”.

⁴⁹ Según el diario Clarín Digital del 21 de diciembre del 2001, “la renuncia de Fernando De la Rúa no sorprendió a nadie. Por el contrario, la salida anticipada del Presidente trajo algo de alivio a una sociedad angustiada. Por eso, a las 19.45 de ayer, cuando la violencia callejera y la represión policial alcanzaban su punto más salvaje en la Plaza de Mayo, el texto con la renuncia del Presidente fue distribuido entre los periodistas de la Casa Rosada. Nadie lo festejó. Ni siquiera los manifestantes que reclamaban el alejamiento de De la Rúa en la zona céntrica de Buenos Aires”.

⁵⁰ Lo acompañaba su edecán, Gustavo Giacosa. Lo saludaban el canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, y el ministro de Turismo, Hernán Lombardi.

⁵¹ La Asamblea Legislativa está conformada por todos los representantes que integran las dos cámaras del Congreso Nacional.

20.972 (Ley de Acefalía), el presidente provisional del Senado, el misionero Ramón Puerta, se hizo cargo formalmente del poder.

Según la Ley de Acefalía, el Congreso tiene 48 horas desde la aceptación de la renuncia del presidente para decidir quién será su sucesor. La elección debe recaer sobre uno de los miembros de la propia Asamblea o gobernadores de provincia. En los hechos, la decisión debía surgir del acuerdo al que llegara el Partido Justicialista (PJ) –que controlaba el Senado y la Cámara de Diputados desde el 14 de octubre del 2001–.

A poco de asumir Ramón Puerta, y a raíz de los incidentes que continuaban sucediéndose en algunas regiones, éste dictó los decretos 16/2001, 18/2001 y 20/2001 PEN, en virtud de los cuales se declaraba por diez días el estado de sitio en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan. En todos los decretos se disponía que debía darse cuenta al Congreso de la Nación e incluirse la declaración del estado de sitio entre los asuntos a considerar en el período de sesiones entonces vigente.

7.2. Presidencia de Adolfo Rodríguez Saá

En la mañana del sábado 22 de diciembre, luego de intensas reuniones, la Asamblea Legislativa designó como nuevo presidente de la Nación a Adolfo Rodríguez Saá, quien hasta entonces era gobernador de la provincia de San Luis.

La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto que impulsaba el Partido Justicialista para la continuidad institucional: además de la designación presidencial, la Asamblea convocó al pueblo a elecciones para el 3 de marzo del 2002, con el objeto de elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Esta elección se realizaría a través del régimen electoral de doble voto simultáneo, también denominado sistema de lemas.

Las cuestiones más debatidas entonces entre los analistas y expertos fueron, precisamente, la referida a la potestad de la Asamblea Legislativa para convocar a elecciones, y por otra parte, si correspondía la abrogación del régimen electoral vigente, sustituyéndolo por el sistema de lemas.

El presidente Rodríguez Saá avanzó sobre algunas cuestiones de importancia, aunque ninguna de ellas finalmente llegó a concretarse. Así, por ejemplo, se avanzó en la elaboración de un proyecto en materia de reparaciones a las víctimas de los hechos de la Plaza de Mayo, así como en la elaboración de proyectos de ley de amnistía en relación con las personas que habían intervenido en ése y en otros conflictos sociales anteriores.

Los proyectos de ley en materia de reparaciones a las víctimas de los hechos ocurridos en diciembre propiciaron, en su mayoría, el establecimiento de sistemas similares a los mecanismos reparatorios específicos sobre los que Argentina ya tiene ejemplos: las leyes 24.043 y 24.411 que reconocieron el derecho al resarcimiento de las víctimas del terrorismo de Estado; o las disposiciones que se dictaron a favor de las víctimas de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero o el atentado a la AMIA.

7.2.1. El cacerolazo del 28 de diciembre del 2001

El contexto interno del PJ era confuso y el presidente Rodríguez Saá tenía dificultades para concitar la adhesión de todos los cuadros de su partido. En ese contexto, algunos episodios generaron irritación e incertidumbre en la población. Por ejemplo, la designación de Carlos

Grosso⁵² o los entredichos públicos entre el presidente y el titular del Banco de la Nación Argentina, David Expósito, respecto de la cuestión financiera.

Este contexto facilitó que el 28 de diciembre se produjera un nuevo “cacerolazo” en Plaza de Mayo y en distintos barrios porteños. Los manifestantes protestaban contra las “viejas caras de la política” y contra la vigencia del “corralito” bancario. La protesta comenzó en los barrios y desde allí fue llegando al centro de la ciudad. Se vieron carteles contra Grosso, contra el ex ministro del Interior José Luis Manzano y la ex interventora del PAMI, Matilde Menéndez. Al igual que la semana anterior, un grupo se concentró en la plaza Congreso y otro marchó por distintas avenidas rumbo a la Plaza de Mayo⁵³.

Apenas entrada la noche, algunos manifestantes fueron retirándose del lugar y otros grupos más violentos avanzaron directamente contra distintos edificios públicos. Carlos Grosso renunció a su cargo en ese momento, pero la violencia se había desatado nuevamente.

7.2.2. Los desmanes de la madrugada del 29 de diciembre

En ese marco, algunos grupos causaron destrozos en sitios emblemáticos como el Congreso Nacional, cuya entrada fue fácilmente franqueada, y la propia Casa de Gobierno.

El operativo de la policía estuvo a cargo del jefe de la fuerza que reemplazó a Rubén Santos, comisario general Roberto Giacomino. La policía comenzó tardíamente a actuar y fue agredida con piedras y palos por los manifestantes. Además, muchos bancos y locales fueron atacados a pedradas y hubo nuevos intentos de saqueos⁵⁴.

Poco después de las dos de la madrugada, dos efectivos que se habían acercado a apagar un foco de incendio fueron brutalmente agredidos por un grupo de jóvenes. Los policías cayeron al suelo, fueron golpeados y les robaron sus armas. Doce policías resultaron heridos y más de 30 personas fueron arrestadas en las zonas de Plaza de Mayo y Congreso.

7.2.3. La renuncia de Adolfo Rodríguez Saá

El 30 de diciembre del 2001 Adolfo Rodríguez Saá presentó, desde San Luis, su renuncia indeclinable ante la Asamblea Legislativa. Era el séptimo día de su gestión.

Rodríguez Saá denunció públicamente la falta de apoyo de algunos de los mandatarios provinciales del PJ, especialmente del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota: “Los lobos o los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos”, dijo desde su provincia.

La versión sobre su renuncia comenzó a escucharse a primeras horas de la noche, cuando se anunció que el ex presidente brindaría un discurso a la población. Esa información circuló apenas un par de horas después de haber fracasado la cumbre que aquél iba a mantener con gobernadores justicialistas en Chapadmalal. De los 14 gobernadores justicialistas sólo seis

⁵² Desde que abandonó la intendencia porteña, Grosso estuvo diez años alejado de la política y reapareció públicamente este año, con un intento de reorganizar a su sector en el PJ de la Capital. Es amigo personal de Rodríguez Saá, había sido designado por Carlos Menem en la Ciudad y dejó el cargo a principios de los 90 con varias causas abiertas por supuestas irregularidades. El funcionario designado, en su propia interpretación de los hechos, aseguró que había sido elegido por su inteligencia y no por su prontuario.

⁵³ Clarín Digital, 28/12/01.

⁵⁴ Diario La Nación, 30/12/01.

mandatarios respondieron al llamado del presidente. Entre otras ausencias se cuentan las de José Manuel De la Sota, Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe, y Néstor Kirchner, de Santa Cruz

7.3. Presidencia de Eduardo Camaño

Una hora después de la renuncia del presidente Rodríguez Saá, renunció también el presidente provisional del Senado, Ramón Puerta, quien se desempeñaba como virtual vicepresidente de la Nación y debía ocupar el cargo hasta que la Asamblea Legislativa designara otro presidente. En consecuencia, el titular de la Cámara de Diputados, el bonaerense Eduardo Camaño, asumió la presidencia de la Nación.

Para entonces, las versiones referidas a la interna del partido peronista indicaban que otros dos bonaerenses, el gobernador Carlos Ruckauf y el senador Eduardo Duhalde, podrían convertirse en candidatos a encabezar un futuro gobierno de “consenso”.

7.4. Presidencia de Eduardo Duhalde

El 1ro. de enero del 2002, con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, la Asamblea Legislativa eligió como presidente de la Nación al justicialista Eduardo Duhalde, con un mandato por dos años –hasta diciembre del 2003–.

Al mediodía del 2 de enero asumió el cargo y recibió los atributos de mando de manos del titular de la Cámara Baja, Eduardo Camaño.

Su designación fue entendida como un segundo ensayo para una salida institucional a la crisis política desatada el 20 de diciembre del 2001. El acuerdo político que llevó a Duhalde a la Casa Rosada es algo más amplio que el anterior e integra a la UCR y parte del Frepaso.

8. Las investigaciones por la represión del 19 y 20 de diciembre

8.1. La causa por las muertes en la ciudad de Buenos Aires

Como se señaló más arriba, a raíz de los hechos de represión hubo numerosas denuncias y querellas criminales presentadas, a partir de las cuales fueron iniciados varios procesos penales. El conocimiento de ellos recayó en la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien se encontraba en turno y había concurrido a la Plaza de Mayo el jueves 20 de diciembre.

El 7 de enero del 2002 la jueza federal dispuso reunir todos esos casos en sólo dos grupos. Por un lado, delegó la averiguación de todos los sucesos ocurridos en la Plaza de Mayo, la Plaza de los Dos Congresos y el corredor que las une en el titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 5 (expte. A-5624/01). Por otro, ella misma conservó la investigación de las circunstancias y la responsabilidad penal respecto de quienes fueron competentes de ordenar el operativo (expte. A-5622/01).

Por medio de una presentación ante la jueza, Fernando De la Rúa negó cualquier responsabilidad por los incidentes ocurridos. En su escrito señaló:

“... en mi carácter de Presidente de la Nación y previa consulta a través del Ministerio del Interior sobre la situación de las provincias, dicté el decreto... declarando el

estado de sitio en todo el país... para asegurar la paz interior y a personas y bienes, informando de ello al H. Congreso.

... Ante episodios de violencia suscitados, agresiones, ataques y delitos contra la propiedad ocurridos y de público conocimiento, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales actúan según la legalidad preestablecida y deben hacerlo dentro de la ley.

... Como Presidente de la Nación no emití orden alguna para actuar en contra de la ley o disposición judicial y me preocupé por el urgente restablecimiento de la paz pública. Es claro que los procedimientos no estaban a mi cargo pero sí dicté aquella medida [el estado de sitio] para resguardar el orden público, en cumplimiento de mi deber constitucional”.

También hicieron presentaciones similares el ex ministro del Interior Ramón Mestre, la defensa del ex secretario de Seguridad Interior Enrique Mathov y el ex Jefe de la Policía Federal Argentina, Rubén Santos. El mismo jueves en que se desataron los trágicos acontecimientos, la jueza prohibió a todos ellos salir del país.

De estas presentaciones, la defensa de Enrique Mathov es la única que intenta dar una explicación de lo ocurrido, además de liberarse de responsabilidad por ello. Admitió haber dado la orden “al jefe de la Policía Federal” para que adoptara las medidas necesarias para proteger la Casa Rosada en el entendimiento que “la autoridad política (en este caso como titular de la Secretaría del Interior) determina el “qué” en tanto la autoridad técnica o profesional, la policía, se encarga de “cómo implementar el objetivo”. La defensa señaló también que la orden impartida para que se adopten las medidas “con la firmeza que sea necesaria” apuntaban a evitar saqueos y desmanes, y señaló que el jueves participaban de la protesta “grupos violentos y organizados” que intentaron romper la barrera policial que rodeaba la Casa de Gobierno. También señaló que la presión sobre la policía fue “permanente e incesante”; que existió un momento donde la violencia se detuvo, cuando se conoció la renuncia del presidente De la Rúa, pero recrudeció a partir de la presencia de grupos “que intentaban crear el caos y el terror”⁵⁵.

Los policías que fueron indagados hasta el momento, por su parte, coincidieron en señalar que algunas órdenes específicas de acción, como por ejemplo la referida a practicar la detención de algunos ciudadanos, habrían estado originadas en la propia jefatura policial. Con respecto al uso de balas de plomo para la represión, las dependencias policiales que intervinieron en los sucesos informaron que no había sido utilizada.

El 5 de febrero del 2002, la jueza federal Servini de Cubría ordenó la detención de seis oficiales de la Policía Federal Argentina, acusados de disparar contra los manifestantes en la esquina de Carlos Pellegrini y Sarmiento en la que Alberto Márquez perdió la vida y Martín Galli fue herido. Los policías detenidos fueron Orlando Juan Oliverio, responsable del Control de Integridad Profesional del Departamento de Asuntos Internos, Roberto Liendo Rodríguez, que revistaba en la División de Drogas Peligrosas, el principal José Luis González, Guillermo Galdame, José María Bercovich y Horacio Barrios. El 7 de febrero del 2002 fue detenido el ex jefe de la PFA, Rubén Santos, como supuesto autor mediato de los delitos cometidos por sus subordinados.

El 11 de febrero declaró como testigo el ex viceministro del interior del gobierno de De la Rúa, Lautaro García Batallán y desmintió los dichos de los diputados Luis Zamora y Marcela Bordenave, según los cuales el ex funcionario habría dicho que la orden de reprimir había partido del entonces presidente. El 12 de febrero del 2002, los fiscales federales requirieron la prisión preventiva del ex secretario de seguridad interior Enrique

⁵⁵ Cfr. Diario Judicial, 04/01/02. www.diariojudicial.com.ar.

Mathov y pidieron, por tercera vez, la indagatoria del ex presidente De la Rúa. El 14 de febrero Rubén Santos amplió su declaración indagatoria.

El 15 de febrero fue detenido el ex Jefe de Operaciones de la Policía Federal, comisario mayor Norberto Gaudiero.

El 21 de febrero, los ex jefes de la policía federal, Adrián Pelacchi y Antonio Di Vietri, declararon como testigos. Según algunas versiones, su testimonio fue dirigido a valorar la existencia de una interna policial.

El 25 de febrero, a última hora, la jueza decretó la falta de mérito y liberó a tres de los policías detenidos. Se trata de Guillermo Galdame, José María Bercovich y Horacio Barrios, todos efectivos de la División Asuntos Internos, cuyo ex jefe, Orlando Oliverio, seguía entonces detenido junto a otros dos oficiales. Al mismo tiempo, la jueza decidió ordenar la captura de otro efectivo de la misma División, que ya había sido solicitada por los fiscales en un extenso lote que incluye a otros once policías.

Los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers apelaron la resolución, según ellos, “Los elementos colectados tienen el grado de certeza suficiente para el dictado de prisión preventiva para Horacio José Barrios, José María Cayetano Bercovich y Guillermo Daniel Galdame”, indicaron los fiscales en la presentación.

A partir de las pericias se pudo saber que los ex policías liberados integraban las brigadas de Asuntos Internos de la Policía Federal y ese día estuvieron en la zona del microcentro en sus respectivos vehículos. En el caso puntual de Galdame, fue identificado por testigos como una de las personas que bajaron de los autos y dispararon a Alberto Márquez.

Los fiscales sostuvieron que “...El objetivo para el que se formaron las brigadas y salieron en dirección hacia el micro y macro centro de esta metrópoli no encierra ningún tipo de dudas para los suscriptos, por cuanto lejos de cumplir una misión de control hacia sus pares, partieron desde la dependencia en las cuales ellos prestaban servicio con una finalidad clara y precisa, para lo cual pactaron de antemano entre ellos los abusos que más tarde cometerían y que de hecho cometieron, como así también el de no prestar auxilios a las personas que por sus accionares se vean perjudicadas y guardar un manto de silencio de no ponerlos en conocimiento de las autoridades correspondientes”.

El 28 de febrero del 2002, la jueza ordenó la detención de Enrique Mathov. Ese día, personal de la División Delitos Complejos de la Policía Federal allanó durante la noche la vivienda del ex secretario de Seguridad pero no encontró al ex funcionario. Mathov en un escrito presentado por su defensa días antes había señalado que “todas las medidas” vinculadas al estado de sitio habían sido “competencia” del ex presidente Fernando De la Rúa. Finalmente, el 1ro. de enero, Enrique Mathov se entregó a la justicia. Durante la mañana de ese día fue interrogado por la jueza.

8.2. La investigación de la represión en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe

El número de víctimas como consecuencia de los hechos ocurridos en diciembre fue muy importante en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Rosario murieron siete personas durante la represión policial a los saqueos de comercios. El juez Osvaldo Barbero tiene a su cargo la investigación de lo ocurrido.

El día 18 de enero del 2002, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario confirmó la prisión preventiva de Esteban Velázquez y Rubén Darío Pérez, agentes policiales miembros

del Comando Radioelétrico de Arroyo seco. Estos agentes están acusados de homicidio simple, en la investigación de la muerte de Claudio Lepratti, cuyo caso hemos relatado en este capítulo.

Testimonios recogidos por el CELS en Rosario afirman que existirían indicios de la participación policial en las muertes de Yanina García, Graciela Acosta y Juan Delgado, durante la represión a los saqueos.